

*Plaza pública*

para la edición del 2 de noviembre de 1995

## Alianzas

Miguel Ángel Granados Chapa

Cuando no se realiza llanamente la función de gobernar, sino que debe ser envuelta en embalajes y marbetes propios de la mercadotecnia (por que librada a su propia sustancia se percibe su insuficiencia), se debe recurrir a la imaginación publicitaria para bautizar con denominaciones originales y sugerentes lo que debía ser el simple ejercicio del gobierno. El ejemplo clásico fue Solidaridad, que dispuso de los fondos habitualmente destinados al gasto social, pero los pintó de una demagogia tricolor y personalista y los hizo aparecer como "una nueva manera de trabajar".

Algo semejante ha ocurrido con la política económica. Por ejemplo, el gobierno de De la Madrid bautizó como Pacto lo que era un paquete de medidas para enfrentar la crisis de 1987, generada entre otros factores por la ineptitud o inmediatez de los responsables de la política económica de aquel entonces.

La emergencia surgida en diciembre pasado dio lugar a una primera modificación en esa nomenclatura, que pretendió siempre disimular con fingida participación de los interesados el dirigismo autoritario de un régimen afiliado al neoliberalismo. En esa temporada el pacto redivivo se llamó Acuerdo, como si lo hubiera entre las partes. Ahora, se ha elegido una nueva palabra para el

mismo mecanismo. A partir del domingo pasado se llaman alianzas los programas de acción gubernamentales. Se presentaron tres en el reducido lapso de cuatro días. El domingo apareció la de orden general, destinada a la recuperación económica y el empleo. El martes tocó el turno a la Alianza para el campo, que se convirtió en tal por el nominalismo de que estamos hablando, pero que en realidad era un programa agropecuario pedido tres meses atrás por el Ejecutivo. Y el miércoles figuró en el escenario la Alianza para el fortalecimiento y modernización de la seguridad social, una propuesta que como la anterior estaba en curso, de tiempo atrás, y a la que se le colocó la marca de fábrica que la oportunidad propagandística exige. Pronto se anunciará la conversión de Solidaridad en otra Alianza para quién sabe qué.

La necesidad de disfrazar con nombres simbólicos la acción de gobierno se topa con límites infranqueables. No es posible innovar permanentemente. Por eso se ha vuelto a utilizar un término sobado y resobado. Aparte referir a la vinculación de Dios con su pueblo elegido, la palabra *alianza* tuvo de antiguo una connotación bélica y de acción política común entre los estados. El honor de haberlo puesto a circular como marca publicitaria corresponde al Departamento de Estado norteamericano, que llamó Alianza para el Progreso a una gran operación política anticomunista (y más específicamente anticastrista) sustentada en asistencia financiera canalizada a través del Banco Interamericano para el Desarrollo a partir de 1961.

En México la utilizó el presidente Echeverría para dar una nueva apariencia al PRI. La Alianza Popular Revolucionaria era en rigor el partido oficial mismo, presentada sin embargo como un instrumento para la deliberación de políticas sociales. Iniciativa política efímera, de su presencia apenas queda huella un cuarto de siglo después. Aquí y allá se llaman de ese modo unidades habitacionales bautizadas con ese complicado nombre, y nada más. En el siguiente sexenio, el de López Portillo, se organizó la Alianza para la Producción, **un conjunto de medidas** muy semejantes a las que fueron anunciadas el domingo y el martes pasados. tan claramente Alianza ha sido una marca en el mercado político, que Conasupo puso a la venta una panoplia de artículos de consumo popular precisamente bautizados Alianza.

A reserva de examinar el contenido de los tres documentos dados a conocer esta semana, amén de señalar hoy esta vuelta al pasado populista (al menos en la elección del término, preferido al neoliberal Pacto), anticipemos que el dedicado a la recuperación económica y el empleo, y el referido al campo muestran una tenue e incipiente reacción gubernamental ante la exigencia generalizada de abandonar el fundamentalismo antinflacionario y poner el crecimiento en el centro de las preocupaciones del gobierno.

Se trata apenas de una aproximación al verdadero cogollo del problema, pero como algo es mejor que nada, es correcta esta leve rectificación del rumbo, que en el ámbito rural se manifiesta en hablar sin rubores de

apoyos fiscales a la producción, abandonando la pudibundez neoliberal que considera que *subsidio* es una mala palabra. Y aunque no tenemos por qué suponer que esta vez tales programas económicos correrán una suerte diversa que la de sus precedentes, el nuevo enfoque es mínimamente **esperanzador**. Pero eso no elimina la necesidad de mudar por entero la estrategia económica y no sólo a trocitos.

## PLAZA PÚBLICA

MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA

## Alianzas

Los documentos tras los cuales se parapeta el gobierno para exponer su política económica simulando que son resultado de la consulta y la concertación de intereses, han ido variando de nombre hasta que se vuelve al punto en que se comenzó.

CUANDO NO SE REALIZA LLANAMENTE LA FUNCIÓN de gobernar, sino que debe ser envuelta en embalajes y marbetes propios de la mercadotecnia (porque librada a su propia sustancia se percibe su insuficiencia), se debe recurrir a la imaginación publicitaria para bautizar con denominaciones originales y sugerentes lo que debía ser el simple ejercicio del gobierno. El ejemplo clásico fue Solidaridad, que dispuso de los fondos habitualmente destinados al gasto social, pero los pintó de una demagogia tricolor y personalista y los hizo aparecer como "una nueva manera de trabajar".

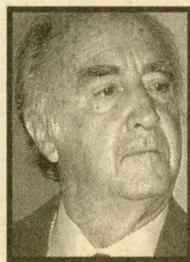
Algo semejante ha ocurrido con la política económica. Por ejemplo, el gobierno de De la Madrid bautizó como Pacto lo que era un paquete de medidas para enfrentar la crisis de 1987, generada entre otros factores por la ineptitud o inmediatez de los responsables de la política económica de aquel entonces.

La emergencia surgida en diciembre pasado dio lugar a una primera modificación en esa nomenclatura, que pretendió siempre disimular con fingida participación de los interesados el dirigismo autoritario de un régimen afiliado al neoliberalismo. En esa temporada el pacto redivivo se llamó Acuerdo, como si lo hubiera entre las partes. Ahora, se ha elegido una nueva palabra para el mismo mecanismo. A partir del domingo pasado se llaman alianzas los programas de acción gubernamentales. Se presentaron tres en el reducido lapso de cuatro días. El domingo apareció la de orden general, destinada a la recuperación económica y el empleo. El martes tocó el turno a la Alianza para el campo, que se convirtió en tal por el nominalismo de que estamos hablando, pero que en realidad era un programa agropecuario pedido tres meses atrás por el Ejecutivo. Y el miércoles figuró en el escenario la Alianza para el fortalecimiento y modernización de la seguridad social, una propuesta que como la anterior estaba en curso, de tiempo atrás, y a la que se le colocó la marca de fábrica que la oportunidad propagandística exige. Pronto se anunciará la conversión de Solidaridad en otra Alianza para quién sabe qué.



La necesidad de disfrazar con nombres simbólicos la acción de gobierno se topa con límites infranqueables. No es posible innovar permanentemente. Por eso se ha vuelto a utilizar un término sobado y resobado. Aparte referir a la vinculación de Dios con su pueblo elegido, la palabra *alianza* tuvo de antiguo una connotación bélica y de acción política común entre los estados. El honor de haberlo puesto a circular como marca publicitaria corresponde al Departamento de Estado norteamericano, que llamó Alianza para el Progreso a una gran operación política anticomunista (y más específicamente anticastro) sustentada en asistencia financiera canalizada a través del Banco Interamericano para el Desarrollo a partir de 1961.

En México la utilizó el presidente Echeverría para dar una nueva apariencia al PRI. La Alianza Popular Revolucionaria era en rigor el partido oficial mismo, presentada sin embargo como un instrumento para la deliberación de políticas sociales. Iniciativa política efímera, de su presencia apenas queda huella un cuarto de siglo después. Aquí y allá se llaman de ese modo unidades habitacionales bautizadas con ese complicado nombre, y nada más. En el siguiente sexenio,



El Presidente José López Portillo puso en práctica una estrategia de título y contenido

muy semejantes a las que se dieron a conocer el domingo pasado. En aquel tiempo se trató de la Alianza para la Producción y con el nombre de Alianza hasta hubo productos en el mercado.

el de López Portillo, se organizó la Alianza para la Producción, un conjunto de medidas muy semejantes a las que fueron anunciadas el domingo y el martes pasados. Tan claramente Alianza ha sido una marca en el mercado político, que Conasupo puso a la venta una panoplia de artículos de consumo popular precisamente bautizados Alianza.

A reserva de examinar el contenido de los tres documentos dados a conocer esta semana, amén de señalar hoy esta vuelta al pasado populista (al menos en la elección del término, preferido al neoliberal Pacto), anticipemos que el dedicado a la recuperación económica y el empleo, y el referido al campo muestran una tenue e incipiente reacción gubernamental ante la exigencia generalizada de abandonar el fundamentalismo antinflacionario y poner el crecimiento en el centro de las preocupaciones del gobierno.

Se trata apenas de una aproximación al verdadero cogollo del problema, pero como algo es mejor que nada, es correcta esta leve rectificación del rumbo, que en el ámbito rural se manifiesta en hablar sin rubores de apoyos fiscales a la producción, abandonando la pudibundez neoliberal que considera que *subsidio* es una mala palabra. Y aunque no tenemos por qué suponer que esta vez tales programas económicos correrán una suerte diversa que la de sus precedentes, el nuevo enfoque es mínimamente esperanzador. Pero eso no elimina la necesidad de mudar por entero la estrategia económica y no sólo a trocitos.

•••

## CAJÓN DE SASTRE

Falta por indagar el móvil verdadero de una dirigencia sindical entrenada para no dar paso sin huarache, es decir, para obtener provecho de todo, aun de posiciones legítimas en sí mismas, como es la defensa del patrimonio nacional. Pero de todos modos vale intrínsecamente, y por la naturaleza de los argumentos esgrimidos, la posición de los miembros del consejo de administración de Pemex que representan los intereses sindicales. En la sesión del lunes pasado, votaron en contra de la privatización de la industria petroquímica secundaria, con argumentos que no entrañan simplemente la protección de posiciones laborales. El comité nacional del sindicato petrolero avaló esa posición al día siguiente, haciendo publicar el voto particular de los consejeros sindicales. La posición allí expresada coincide casi puntualmente con la de un grupo de diputados del Partido de la Revolución Democrática, entre ellos Francisco Kuri, que preside la Comisión de Energéticos de la Cámara, y la maestra Ifigenia Martínez, prestigiada por sus varios saberes y en particular por sus tareas sobre la renta petrolera.